

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN SEGUNDA –SUBSECCIÓN A

Bogotá, D. C., veinte (20) de mayo de dos mil veinte (2020)

Magistrada Ponente: **Dra. CARMEN ALICIA RENGIFO SANGUINO**

Tipo de controversia: Control Inmediato de Legalidad
Expediente No.: 2020-01871-00
Acto Administrativo: Decreto 33 de 12 de mayo de 2020 expedido por el Alcalde Municipal de Cucunubá (Cundinamarca)

Corresponde al Despacho pronunciarse sobre la admisión del estudio de legalidad del Decreto 33 de 12 de mayo de 2020 que fuese remitido a esta Corporación por el Alcalde Municipal de Cucunubá (Cundinamarca) y repartido a este Despacho a fin de efectuar el control inmediato de legalidad de que tratan los artículos 136 y 151 de la Ley 1437 de 2011, que rezan:

"Artículo 136. *Control inmediato de legalidad.* Las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción, tendrán un control inmediato de legalidad, ejercido por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en el lugar donde se expidan, si se tratare de entidades territoriales, o del Consejo de Estado si emanaren de autoridades nacionales, de acuerdo con las reglas de competencia establecidas en este Código.

Las autoridades competentes que los expidan enviarán los actos administrativos a la autoridad judicial indicada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su expedición. Si no se efectuare el envío, la autoridad judicial competente aprehenderá de oficio su conocimiento."

Artículo 151. Los Tribunales Administrativos conocerán de los siguientes procesos privativamente y en única instancia:

(...)

14. Del control inmediato de legalidad de los actos de carácter general que sean proferidos en ejercicio de la función administrativa durante los Estados de Excepción y como desarrollo de los decretos legislativos que fueren dictados por autoridades territoriales departamentales y municipales, cuya competencia corresponderá al tribunal del lugar donde se expidan."

Por lo anterior se hace necesario verificar como presupuesto legal, si el Decreto 33 de 12 de mayo de 2020 que fuese remitido a esta Corporación por el Alcalde Municipal de Cucunubá (Cundinamarca) lo fue en desarrollo de la Emergencia Económica decretada el 17 de marzo de 2020.

En virtud de las facultades otorgadas por el Artículo 215 de la Constitución Política, el Presidente de la República con la firma de todos sus Ministros a través del Decreto 417 de 17 de marzo pasado, declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el término de treinta (30) días calendario.

El artículo 20¹ de la Ley 1347 de 1994 "por la cual se regulan los estado de excepción en Colombia", impone el control inmediato de legalidad frente a las medidas que se tomen por las autoridades administrativas con base en los Decretos expedidos con ocasión de los estados de excepción, por parte de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

El municipio de Cucunubá (Cundinamarca) remitió a esta Corporación diferentes Decretos entre ellos el No. 33 de 12 de mayo de 2020, que es del siguiente tenor literal:

**"DECRETO N. 33
12 DE MAYO DE 2020**

"POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONEN MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO NACIONAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES PARA AFRONTAR LA EMERGENCIA SANITARIA POR LA PANDEMIA DE COVID – 19 EN EL MUNICIPIO DE CUCUNUBÁ- CUNDINAMARCA".

EL ALCALDE MUNICIPAL DE CUCUNUBÁ, CUNDINAMARCA, en uso de su atribución legal y en especial las conferidas por la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1515 de 2012, la Ley 715 del 2001, La Ley 1523 de 2012, la Resoluciones 385 y 666 del 24 de Abril de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, el Decreto Nacional 636 del 6 Mayo de 2020 y demás normas complementarias y,

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el Artículo 2 de la Constitución Política: son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Que igualmente el Artículo 49 de la Constitución Nacional preceptúa: La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.

Que corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud... (...) Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad... Que corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.

Que el Artículo 209 de la Constitución Nacional establece: la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación

¹ **Artículo 20.** Control de legalidad. Las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción, tendrán un control inmediato de legalidad, ejercido por la autoridad de lo contencioso administrativo en el lugar donde se expidan si se tratare de entidades territoriales o del Consejo de Estado si emanaren de autoridades nacionales. Las autoridades competentes que los expidan enviarán los actos administrativos a la jurisdicción contencioso-administrativa indicada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su expedición.

y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.

Que el Artículo 1º de la Ley 1523 de 2012, establece la gestión del riesgo de desastres, en adelante la gestión del riesgo, es un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible.

Que la Ley 1523 de 2012, dispone dentro de sus principios generales, Principio de Protección: que orientan la gestión del riesgo Los residentes en Colombia deben ser protegidos por las autoridades en su vida e integridad física y mental, en sus bienes y en sus derechos colectivos a la seguridad, la tranquilidad y la salubridad públicas y a gozar de un ambiente sano, frente a posibles desastres o fenómenos peligrosos que amenacen o infieran daño a los valores enunciados.

Que la Ley 9 de 1779 en el título VII, artículo 478 estableció las normas de vigilancia y control epidemiológicos para: a) el diagnóstico, el pronóstico, la prevención y el control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles y demás fenómenos que puedan afectar la salud; b) la recolección, procesamiento y divulgación de la información epidemiológica, y c) el cumplimiento de las normas y evolución de los resultados obtenidos de su aplicación.

Que el artículo 10, numeral c) del Decreto 3518 de 2006, define la función de las Direcciones municipales de salud o la dependencia que haga sus veces, indicando que deben Organizar y coordinar la red de vigilancia en salud pública de su jurisdicción de acuerdo con los lineamientos establecidos por el ministerio de la Protección social.

Que es responsabilidad del Municipio organizar el equipo de Respuesta Inmediata Municipal y elaborar el cronograma de actividades teniendo en cuenta el recurso humano disponible.

Que el 11 de Marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud, declaro y cualifico a dicho virus como "PANDEMIA", lo cual implica el que se trata de una enfermedad epidémica que se extiende en varios países del mundo de manera simultánea. Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria por causa del COVID-19, hasta el 30 de mayo de 2020, y adoptó medidas sanitarias con el objeto de prevenir y controlar la propagación del COVID-19 en el territorio nacional y mitigar sus efectos.

Que con el propósito de garantizar el acceso y abastecimiento de la población a bienes y servicios de primera necesidad se debe garantizar la disponibilidad y suficiencia de aquellos que por su misma naturaleza no deben interrumpirse pues afectarían la salud y supervivencia de los ciudadanos. Que dadas las circunstancias y medidas de cuidado para preservar la salud y la vida, evitar el contacto y la propagación del coronavirus COVID-19, se debe garantizar el abastecimiento y disposición de alimentos y de otros artículos de primera necesidad que garanticen el ejercicio de derechos fundamentales.

Que el Presidente de la República, mediante Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020, declaró el Estado de Emergencia, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, con el fin de hacer frente a las circunstancias imprevistas y detonantes en lo relacionado a la salud pública y la crisis económica y social generada por la pandemia del "Coronavirus COVID-19".

Que el Presidente de la República, mediante Decreto 420 del 18 de Marzo de 2020, "imparte(n) instrucciones para expedir normas en materia de orden público en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia de COVID-19" Que el Departamento de Cundinamarca, expidió los Decretos No. 137 del 12 de marzo de 2020 y 140 del 16 de marzo de 2020, por medio de los cuales se declaró la alerta amarilla y la situación de calamidad pública en el Departamento,

respectivamente; todo en torno a contener y generar las herramientas administrativas necesarias para la contención, manejo y respuesta ante la crisis generada por la pandemia.

Que la cifra diaria de afectados por el COVID 19, conforme los reportes oficiales emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, sigue en ascenso en el territorio nacional y en nuestro Departamento de Cundinamarca. Que mediante Decreto Municipal No. 021 del 17 de marzo de 2020, "Por Medio del Cual se Declara la Calamidad Pública en el Municipio de Cucunubá y se Dictan otras Disposiciones", el Alcalde Municipal de Cucunubá, definió las acciones y medidas a adoptar en el Municipio.

Que a la fecha, pese a los esfuerzos del Gobierno Nacional así como a los del Gobierno Departamental y Municipal, se siguen requiriendo actuaciones desde todos los ámbitos administrativos que permitan eficazmente generar respuestas inmediatas a las necesidades de salud pública, de emergencia y calamidad que la ciudadanía presenta como consecuencia de la grave situación generada por la pandemia.

Que mediante Decreto 531 del 8 de abril de 2020, el Presidente de la República imparte instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público ordenó el aislamiento preventivo de todas las personas habitantes de la República de Colombia a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, hasta las cero (00:00 a.m) del día 27 de abril de 2020.

Que el artículo 24 de la Constitución Política establece el derecho fundamental a circular libremente por el territorio nacional; sin embargo, no es un derecho absoluto, toda vez que consagra que puede tener limitaciones, como lo define la Honorable Corte Constitucional en Sentencia T-483 del 8 de julio de 1999 lo estableció entre otros aspectos los siguientes: "El derecho fundamental de circulación puede ser limitado, en virtud de la ley, pero solo en la medida necesaria e indispensable en una sociedad democrática, con miras a prevenir la comisión de infracciones penales, proteger el interés público, la seguridad nacional, el orden público, la salud y la moral públicas, o los derechos y libertades de las demás personas, y en cuanto a la restricción sea igualmente compatible con el ejercicio de los demás derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. Pero, como lo ha sostenido la Corte, toda restricción de dicho derecho debe estar acorde con los criterios de necesidad, racionalidad, proporcionalidad y finalidad; no son admisibles, por lo tanto, las limitaciones que imponga el legislador arbitrariamente, esto es, sin que tengan la debida justificación, a la luz de los principios, valores, derechos y deberes constitucionales".

Que los artículos 44 y 45 de la Constitución Política de Colombia establece que son derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, y el Estado tiene la obligación de asistirlos y protegerlos para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos. Y el inciso final del artículo 44 ibídem, establece que los derechos de los niños prevalecen sobre los demás.

Que el artículo 46 de la Constitución Política contempla que el Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y les garantizará los servicios de seguridad social integral. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 49 y 95 de la Constitución Política, toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad, y obrar conforme al principio de solidaridad social, responder con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas.

Que el artículo 315 de la Constitución Política señala como atribución de los alcaldes, conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones y ordenes que reciban del Presidente de la República. Que el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012 señala que los alcaldes ejercerán las funciones que les asignan la Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el presidente de la República o gobernador respectivo, y en relación con el orden público deberán (i) conservar el orden público en el municipio, de

conformidad con la ley y las instrucciones del presidente de la República y del respectivo gobernador.

Que de conformidad con el artículo 198 de la Ley 1801 de 2016 son autoridades de policía, entre otros, el presidente de la República, los gobernadores y los alcaldes distritales o municipales. Que de conformidad con el artículo 199 de la Ley 1801 de 2016, es atribución del presidente de la República: (i) ejercer la función de Policía para garantizar el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y los deberes, de acuerdo a la Constitución y la ley; (ii) tomar las medidas que considere necesarias para garantizar la convivencia en el territorio nacional, en el marco de la Constitución, la ley y el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana; y (iii) impartir instrucciones a los alcaldes y gobernadores para preservar y restablecer la convivencia.

Que de conformidad con los artículos 201 y 205 de la Ley 1801 de 2016, corresponde a los gobernadores y alcaldes ejecutar las instrucciones del presidente de la República en relación con el mantenimiento y restablecimiento de la convivencia. Que de conformidad con los artículos 5 y 6 de la Ley 1801 de 2016 se entiende por convivencia, la interacción pacífica, respetuosa y armónica entre las personas, con los bienes, y con el ambiente, en el marco del ordenamiento jurídico, y señala como categorías jurídicas las siguientes: (i) Seguridad: garantizar la protección de los derechos y libertades constitucionales y legales de las personas en el territorio nacional. (ii) Tranquilidad: lograr que las personas ejerzan sus derechos y libertades, sin abusar de los mismos, y con plena observancia de los derechos ajenos. (iii) Ambiente: favorecer la protección de los recursos naturales, el patrimonio ecológico, el goce y la relación sostenible con el ambiente y (iv) Salud Pública: es la responsabilidad estatal y ciudadana de protección de la salud como un derecho esencial, individual, colectivo y comunitario logrado en función de las condiciones de bienestar y calidad de vida.

Que el Parágrafo 1 del artículo 2.8.8.1.4.3 Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, establece que: "...Sin perjuicio de las medidas antes señaladas y en caso de epidemias o situaciones de emergencia sanitaria nacional o internacional, se podrán adoptar medidas de carácter urgente y otras precauciones basadas en principios científicos recomendadas por expertos con el objetivo de limitar la diseminación de una enfermedad o un riesgo que se haya extendido ampliamente dentro de un grupo o comunidad en una zona determinada". Que el numeral 44.3.5 del artículo 44 de la Ley 715 de 2001, señala como competencia a cargo de los municipios: "...Ejercer Vigilancia y Control sanitario en su jurisdicción, sobre los factores de riesgo para la salud, en los establecimientos y espacios que puedan generar riesgos para la población, tales como establecimientos educativos, hospitales, cárceles, cuarteles, albergues, guarderías, ancianatos, puertos, aeropuertos y terminales terrestres, transporte público, piscinas, estadios, coliseos, gimnasios, bares, tabernas, supermercados y similares, plazas de mercado, de abasto público y plantas de sacrificio de animales, entre otros.

Que según el artículo 14 de la Ley 1523 de 2012, los Alcaldes como jefes de la administración local, representan al Sistema Nacional en el Distrito y en el municipio, y como conductores del desarrollo local, son los responsables directos de la implementación de los procesos de gestión del riesgo en sus territorios, incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción.

Que el artículo 12 ídem, consagra que: "Los Gobernadores y alcaldes. Son conductores del sistema nacional en su nivel territorial y están investidos con las competencias necesarias para conservar la seguridad, la tranquilidad y la salubridad en el ámbito de su jurisdicción".

Que el artículo 202 de la Ley 1801 de 2016 "Código Nacional de Seguridad y Convivencia" otorga a los gobernadores y alcaldes la competencia extraordinaria de policía para atender situaciones de emergencia o calamidad, con la finalidad de prevenir los riesgos o mitigar los efectos provenientes de epidemias u otras situaciones de emergencia dentro de su respectiva jurisdicción, pudiendo adoptar para el efecto una serie de medidas como la suspensión de reuniones, aglomeraciones, actividades económicas sociales, cívicas, religiosas o políticas, sean estas públicas o privadas; ordenar medidas de restricción de la movilidad,

entre otras, de las cuales se destacan las siguientes: "4. Ordenar la suspensión de reuniones, aglomeraciones, actividades económicas, sociales, cívicas, religiosas o políticas, entre otras, sean estas públicas o privadas. 5. Ordenar medidas restrictivas de la movilidad de medios de transporte o personas, en la zona afectada o de influencia, incluidas las de tránsito por predios privados. 11. Coordinar con las autoridades del nivel nacional la aplicación y financiación de las medidas adoptadas, y el establecimiento de los puestos de mando unificado. 12. Las demás medidas que consideren necesarias para superar los efectos de la situación de emergencia, calamidad, situaciones extraordinarias de inseguridad y prevenir una situación aún más compleja."

Que el Ministerio de Salud y Protección Social en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, adoptó mediante la Resolución 464 del 18 de marzo de 2020, la medida sanitaria obligatoria de aislamiento preventivo, para proteger a los adultos mayores de 70 años, ordenando el aislamiento preventivo para las personas mayores de setenta (70) años, a partir del veinte (20) de marzo de 2020 a las siete de la mañana (7:00 am) hasta el treinta (30) de mayo de 2020 a las doce de la noche (12:00 p.m.). Que mediante el decreto 457 del 22 de marzo de 2020, "Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público", el Presidente de la Republica, señaló que se decretaba el aislamiento obligatorio para todo el país para frenar el avance del coronavirus. Medida que entró a regir desde el martes 24 de marzo a las 23:59 horas hasta el lunes 13 de abril a las cero horas 00:00 del lunes 13 de abril de 2020.

Que según lo afirmó el Presidente de la República en su calidad de suprema autoridad administrativa y de policía: "la medida del Aislamiento Preventivo Obligatorio en todo el territorio nacional busca que, como sociedad, nos protejamos, garantizando el abastecimiento de alimentos, el acceso a los medicamentos, la adecuada prestación de los servicios públicos esenciales, así como de aquellos indispensables para el funcionamiento de la sociedad. Que con la finalidad de evitar que se siga propagando el virus y continuar con las medidas de mitigación de sus efectos mediante el decreto 531 del 08 de abril del 2020, "Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público", el Presidente de la Republica, señaló que se decretaba el aislamiento obligatorio para todo el país para frenar el avance del coronavirus. Medida que rigió desde lunes 13 de abril de 2020 y hasta las cero horas 00:00 del 27 de abril de 2020.

Que mediante Decreto 593 del 24 de Abril de 2020, el Presidente de la República imparte instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público y ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 27 de Abril de 2020, hasta las cero (00:00 a.m) del día 11 de Mayo de 2020.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, adoptó mediante la Resolución 666 del 24 de Abril de 2020, adoptó el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID – 19.

Que mediante Decreto Municipal No. 024 del 31 de marzo de 2020, y dada la continuidad del aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno Nacional, el municipio de Cucunubá prorrogó la declaratoria de calamidad pública efectuada mediante Decreto No. 021 del 2020. Que mediante Decreto Municipal No. 028 de 11 de abril de 2020 el municipio de Cucunubá estableció el Pico y Género y dictó otras disposiciones con la finalidad de regular el ejercicio de determinadas actividades exceptuadas de la cuarentena nacional obligatoria.

Que mediante Decreto Municipal No. 031 de 26 de abril de 2020 el municipio de Cucunubá prorrogó el Pico y Género y estableció los horarios para actividad física y autorizó la apertura de obras de construcción con la finalidad de regular el ejercicio de determinadas actividades exceptuadas de la cuarentena nacional obligatoria, de conformidad con el Decreto 593 de 2020.

Que mediante Decreto 636 del 6 de Mayo de 2020, el Presidente de la República imparte instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público ordenó el aislamiento preventivo de todas las personas habitantes de la República de Colombia a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 11 de mayo de 2020, hasta las cero (00:00 a.m) del día 25 de mayo de 2020. Que en las sesiones del Consejo de Gestión del Riesgo realizadas en el mes de Abril y Mayo de 2020, se analizaron las medidas a tomar en aras a salvaguardar la vida de los Cucunubenses, con ocasión de la pandemia del COVID- 19. Que, aunque en el Municipio de Cucunubá, a la fecha NO se han confirmado casos de Coronavirus COVID 19, y siguiendo las directrices del Gobierno Nacional y Departamental, así como del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres del Municipio de Cucunubá, en el cual mediante sesión del día 11 de Mayo de 2020, se establecieron recomendaciones y medidas administrativas para su mitigación. Que es importante continuar cumplimiento el aislamiento preventivo obligatorio y ante la propagación y crecimiento del contagio en municipios vecinos con casos positivos y ante la necesidad de proteger a nuestra población Cucunubenses, se hace necesario adoptar y establecer nuevas disposiciones y lineamientos para enfrentar la propagación de la pandemia de coronavirus COVID – 19. En mérito de lo expuesto el Alcalde Municipal de Cucunubá, Cundinamarca,

D E C R E T A

ARTICULO PRIMERO: Mantener el PICO Y GÉNERO en toda la jurisdicción del municipio de Cucunubá para la Adquisición bienes de primera necesidad - alimentos, bebidas, medicamentos y dispositivos médicos que no sean esenciales, productos de aseo, limpieza, y mercancías de ordinario consumo y para el desplazamiento a servicios bancarios, financieros y de operadores pago, atención en todos los establecimientos de comercio y realización de actividad física, el cual se desarrollará así: - Los días impares: podrán salir todas las mujeres que no se encuentren en ejercicio de alguna actividad que se esté dentro de las excepciones contempladas en el decreto nacional. - Los días pares: podrán salir todos los hombres que no se encuentren en ejercicio de alguna actividad que esté dentro de las excepciones contempladas en el decreto nacional.

PARÁGRAFO PRIMERO: Las actividades contempladas en este artículo podrán ser desarrolladas, mientras dure la medida preventivo obligatorio, en el horario comprendido entre las 6:00 a.m. y 7:00 p.m.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Las personas que desarrollen las actividades exentas del decreto 636 de 2020 deberán estar acreditadas e identificadas en el ejercicio de sus funciones.

PARÁGRAFO TERCERO: Se permitirá la circulación de una sola persona por núcleo familiar para realizar las actividades descritas en este artículo y de conformidad con el pico y género establecido.

PARÁGRAFO CUARTO: Cuando un niño o niña, adolescente, persona con discapacidad, persona mayor de 70 años o persona enferma con tratamientos especiales que requieren asistencia, deba salir de su lugar de residencia o aislamiento, podrá hacerlo acompañado de una persona que le sirva de apoyo, para lo cual deberá acreditarse dicha condición.

PARÁGRAFO QUINTO: Con el fin de proteger la integridad de las personas, mascotas y animales de compañía, y en atención a medidas fitosanitarias, solo una persona por núcleo familiar podrá sacar a las mascotas o animales de compañía y de conformidad con el pico y género. (Sólo en caso de no existir ninguna persona del género permitido para el día que pueda sacar la mascota se autoriza que lo haga la persona del género que no se encuentra autorizado).

PARÁGRAFO SEXTO: Para el desarrollo de las actividades contempladas en este artículo el miembro de la familia que de conformidad con su género tenga autorizado salir y sea el designado por la familia para realizar las actividades señaladas en este artículo deberá tener en cuenta los siguientes parámetros: 1. Portar la cédula original 2. USO obligatorio de tapabocas (Es posible usar tapabocas de tela).

PARÁGRAFO SÉPTIMO: En caso de ser domiciliario de algún establecimiento de comercio que se encuentre debidamente exceptuado de la cuarentena obligatoria tal condición deberá estar acreditada con un carné o certificación que indique nombre completo, número de cédula, nombre, dirección y teléfono del establecimiento de comercio y nombre del propietario del mismo y portar todos los elementos de protección como tapabocas y guantes.

PARÁGRAFO OCTAVO: Los propietarios de los establecimientos de comercio que estén autorizados para prestar sus servicios deberán permanecer dentro del establecimiento y no podrán estar en los pasillos y andenes del Municipio y en todo caso deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 666 del 24 de Abril de 2020, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.

PARÁGRAFO NOVENO: Ningún establecimiento de comercio autorizado podrá atender a más de dos (2) personas simultáneamente; así mismo, deberá cumplir con medidas de asepsia necesarias para su protección, para los compradores antibacterial al ingresar y al retirarse y para el personal de atención de los establecimientos indumentaria de protección, la cual no podrán llevar a su casa y cumplimiento a los protocolos establecidos por el Gobierno Nacional mediante Resolución 666 de 2020.

PARÁGRAFO DÉCIMO: Los habitantes del área rural del Municipio tendrán derecho a ingresar al casco urbano cumpliendo las mismas condiciones establecidas para los del área urbana como son una persona por familia, mantener la asepsia y una vez finalizada su compra regresar inmediatamente a su casa y aplicar las medidas de prevención antes de ingresar al hogar.

PARÁGRAFO UNDÉCIMO: El aislamiento es de cumplimiento obligatorio las personas deben permanecer dentro de sus casas, no en los andenes ni frente a ellas.

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR el desarrollo de actividad física de los niños, niñas y adolescentes de 6 a 18 años por un periodo máximo de media hora y siempre en compañía de un adulto y en el horario de 4:00 p.m. a 5:00 p.m.

PARÁGRAFO PRIMERO: Para el desarrollo de esta actividad se tomará en cuenta el género del adulto que acompañe el desarrollo de la misma.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Mantener los parámetros y horarios establecidos en el Artículo Segundo del Decreto Municipal No. 031 de 2020 para el desarrollo de la actividad física de los mayores de edad, teniendo en cuenta que éstos deberán acogerse al pico y género establecido para el efecto.

ARTICULO TERCERO: CONTINUAR Estableciendo jornadas de teletrabajo y trabajo en casa, así como presencial para atender las funciones y labores de la administración Municipal y que no requieran la presencia física de sus empleados o contratistas, limitando la apertura de sus instalaciones exclusivamente para atender labores en las que es indispensable la presencialidad. (...)

Examinado el Decreto transcrito, se advierte que el mismo no fue expedido en virtud del estado de emergencia económica, social y ecológica declarado por el Presidente de la República el 17 de marzo pasado, sino en ejercicio de las funciones que el Alcalde Municipal de Cucunubá (Cundinamarca) tiene dadas por la Constitución y la Ley, ciñéndose a los Decretos 418, 420, 457 Y 593 de 2020 expedidos por el Gobierno Nacional en materia de orden público y en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 en razón a la pandemia originada por el Covid-19.

Es del caso señalar que los Decretos 418, 420 y 593 de 2020 a que hace mención el mandatario de Cucunubá (Cundinamarca) en los Actos

Administrativos objeto de pronunciamiento, fueron expedidos por el Gobierno Nacional en ejercicio de funciones ordinarias dadas por la Constitución y la Ley al Presidente de la República como primera autoridad de Policía de la Nación.

Así por ejemplo el Decreto 418 de 2020 "Por el cual se dictan medidas transitorias para expedir normas en materia de orden público" fue expedido por El Presidente La República Colombia, "en ejercicio de las facultades Constitucionales y legales en especial que le confiere numeral 4 del artículo 189, el artículo 315 la Constitución Política Colombia y el artículo 199 de la Ley 1801 de 2016" y en él se dispuso que "La dirección del manejo del orden público con el objeto de prevenir y controlar propagación del COVID-19 en el territorio y mitigar sus efectos, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, estará en cabeza del presidente de la República."

En la misma fecha se expidió el Decreto 420 de 2020 "Por el cual se imparten instrucciones para expedir normas en materia de orden público en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia de COVID-19" en el cual haciendo uso de "las facultades Constitucionales y legales en especial las que le confiere el numeral 4 del artículo 189, los artículos 303 y 315 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 199 de la Ley 1801 de 2016, en concordancia con el Decreto 418 de 2020" dictó instrucciones a los alcaldes y gobernadores en materia de orden público en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19 y no, en el de la emergencia económica, social y ecológica declarada el 17 de marzo pasado.

Este último Decreto fue derogado por el 427 de 22 de marzo de 2020 "Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público", en el cual nuevamente las competencias invocadas fueron ordinarias "las que le confiere el numeral 4 del artículo 189, los artículos 303 y 315 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 199 de la Ley 1801 de 2016" y en él se dispuso:

"Artículo 1. Aislamiento. Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.

Para efectos de lograr el efectivo aislamiento preventivo obligatorio se limita totalmente la libre circulación de personas y vehículos en el territorio nacional, con las excepciones previstas en el artículo 3 del presente Decreto.

Artículo 2. Ejecución de la medida de aislamiento. Ordenar a los gobernadores y alcaldes para que en el marco de sus competencias constitucionales y legales, adopten las instrucciones, actos y órdenes necesarias para la debida ejecución de la medida de aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, ordenada en el artículo anterior.

Artículo 3. Garantías para la medida de aislamiento preventivo obligatorio. Para que el aislamiento preventivo obligatorio garantice el derecho a la vida, a la salud en conexidad con la vida y la supervivencia, los gobernadores y alcaldes, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, permitirán el derecho de circulación de las personas en los siguientes casos o actividades:

Idéntico contenido tiene el Decreto 593 de 24 de abril de 2020, que en uso de las mismas facultades ordenó el aislamiento preventivo obligatorio entre el 27 de abril y el 11 de mayo de 2020.

Según se transcribió en líneas precedentes, a voces de los artículos 20 de la Ley 137 de 1994 y 136 de la Ley 1437 de 2011, son las decisiones administrativas adoptadas con base en Decretos Legislativos dictados por el Gobierno Nacional en desarrollo de los estados de excepción, las que deben someterse a control automático de legalidad; y ni en las facultades anunciadas por el Alcalde de Cucunubá en el decreto, ni en el cuerpo del mismo, se advierte que se haya expedido con ocasión de la Declaratoria de emergencia económica, social y ecológica efectuada por el Decreto 417 de 2020 y los únicos decretos que menciona, 418, 457 y 593 de 2020 no son decretos legislativos expedidos en virtud del estado de excepción, sino decretos ordinarios en los cuales el Presidente de la República como autoridad de policía y responsable del orden público de la Nación, toma determinaciones de aislamiento social y restricción al consumo de bebidas embriagantes, entre otras.

Por lo anterior el Decreto 57 de 25 de abril de 2020 expedido por el Alcalde municipal de Cucunubá (Cundinamarca), no es de aquellos respecto de los cuales corresponde a esta Corporación efectuar control inmediato de legalidad a la luz de los artículos 136 y 151 numeral 14 de la Ley 1437 de 2011 y por tanto no se avocará su conocimiento.

Por lo anterior se,

RESUELVE

PRIMERO. NO AVOCAR el estudio del control inmediato de legalidad del Decreto 33 de 12 de mayo de 2020, expedido por el Alcalde Municipal de Cucunubá (Cundinamarca), por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO. NOTIFICAR de la presente decisión al Alcalde Municipal de Cucunubá (Cundinamarca), al Ministerio Público y comunicarla a la comunidad en general a través de portal web.

TERCERO. Ejecutoriada la presente providencia, **ARCHIVAR** el expediente previas las anotaciones del caso.

NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE



CARMEN ALICIA RENGIFO SANGUINO
MAGISTRADA